

ESTUDIO DOCUMENTAL SOBRE EL PAPEL DE LA MINERÍA ILÍCITA COMO MEDIO PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO*¹

Carlos Andrés Mazo Roldán**²

Resumen

En las últimas décadas en Colombia el gobierno nacional ha centrado sus esfuerzos en mitigar las problemáticas vinculadas al narcotráfico, principal fuente económica de los grupos al margen de la ley; situación que los ha llevado a buscar otros medios de financiación como la minería ilícita, donde estos grupos subversivos aprovechan su ubicación estratégica en áreas ricas en minerales, especialmente yacimientos auríferos, sumado a que son áreas apartadas y de niveles bajos de protección por el Estado. Es así como, el presente artículo, corresponde a un estudio documental en el que se plantea la relación existente entre el ejercicio de la minería ilícita, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, con el fin de concientizar a las autoridades competentes, organismos de control del Estado, la Fuerza Pública y la población en general, buscando con ello incentivar la implementación de estrategias que permitan combatir este flagelo.

Palabras Clave: Explotación de recursos, lavado de activos, minería ilícita, terrorismo.

¹ Artículo para optar por el título de Especialista en Administración de la Seguridad en el marco del convenio entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad Pontificia Bolivariana.

² Profesional en Ciencias Militares, Candidato a especialista en Administración de la Seguridad dentro del convenio UMNG y UPB, con experiencia como Asesor y coordinador de seguridad en empresas petroleras y mineras; Coordinador Corporativo de Protección Integral de una de las principales empresas productoras de oro en Colombia.

Introducción

Colombia ha padecido durante los últimos sesenta años, una guerra sin cuartel, donde con el pasar del tiempo, se han visto mezcladas las ansias de poder por parte de grupos subversivos de izquierda, la sed de venganza de grupos de autodefensas de derecha, el afán de los gobiernos de turno por lograr la estabilidad nacional a cualquier precio, y el deseo cada vez mayor de obtener riquezas de la manera más rápida, sin importar que se tenga que hacer, como se tenga que hacer y a quien se tenga que hacer, llegando en la mayoría de los casos a cometer actos de barbarie, que han llevado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional a calificar dichas organizaciones como grupos terroristas.

Para lograr sus objetivos, se han formado diversas organizaciones criminales, divididas en estructuras armadas, ideológicas, de apoyo y estructuras financieras encargadas de generar y administrar los recursos necesarios para sostener la organización, para lo cual recurren a diversas prácticas como el secuestro, la extorsión, la corrupción, el sicariato, el tráfico de armas y el narcotráfico, convirtiendo este último en su principal fuente de financiación.

Dichas organizaciones aprovechan extraordinariamente los recursos obtenidos, gracias a la habilidad que tienen para darle en la mayoría de los casos una apariencia de legalidad, a través de diversos métodos empleados para el lavado de activos los cuales finalmente, se suman a otras fuentes de ingresos “legales” fortaleciendo el músculo criminal que les permite financiar sus acciones terroristas.

Es evidente que los programas de gobierno existentes para lograr la reducción de mencionados cultivos han sido efectivos, pues así lo registran las cifras que se llevan en esta materia(Observatorio de Drogas de Colombia, 2010). Esto ha generado que los grupos narcoterroristas busquen otras alternativas de ingresos económicos y han puesto, con determinación, su interés en las actividades de minería aurífera sin importar obviamente los métodos que deban emplear para lograr sus propósitos.

Una gran coincidencia es que gran parte del territorio nacional donde se encuentran los yacimientos mineros, especialmente las reservas de oro, cuentan con una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, dentro de los cuales se destacan grupos de narcoterroristas de las FARC y miembros de las bandas criminales conocidas como BACRIM, los cuales, al dominar estos territorios, inducen (por la razón o por la fuerza) a sus pobladores a realizar actividades de minería, en la mayoría de los casos minería ilícita o ilegal.

Otros aspectos que han motivado a que los grupos armados ilegales hayan aumentado su participación en el campo de la minería, son el creciente precio del oro, y al poco control que ejercen las entidades oficiales sobre la explotación y comercialización del mismo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el siguiente es el interrogante que queda:

¿Qué papel ha venido jugando la minería ilícita en el contexto del lavado de activos y financiación del terrorismo?

Desarrollo

“Todos tenemos que ser muy firmes en combatir la minería ilegal, porque esa minería ilegal está siendo en buena forma controlada por los grupos al margen de la ley, y es una importante y creciente fuente de financiación”(Juan Manuel Santos, 2011).

La problemática generada por el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ha sido identificada, analizada y expresada no solo por las diferentes autoridades o instituciones de control del estado, sino también por muchos autores, estudiosos y profesionales de diferentes áreas que se han visto de alguna forma involucrados o interesados por este tema. Tal es el caso de la Doctora María Teresa Balen de Pérez Toro, Abogado Experto en Lavado de Activos y Seguridad Social, quien en su trabajo Lavado de Activos – El caso colombiano, manifiesta:

La estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el Lavado de activos; se ha hecho evidente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países(Balen de Pérez Toro, 2001, pág. 2)

De igual forma hace énfasis en que:

La notoria expansión del problema, generada inicialmente y en gran parte por las organizaciones del narcotráfico, refleja un desarrollo tal de las actividades delictivas que hoy por hoy se han convertido en una actividad “empresarial”

globalizada. Este fenómeno revela el lado oscuro de la economía mundial y del desarrollo social, en el que los empresarios criminales son maestros en el arte de explotar para su propio beneficio los mercados mundiales, con la falta de armonización entre los países de las políticas de prevención y control (Balén de Pérez Toro, 2001, pág. 2).

En los últimos 13 años³ el Gobierno colombiano ha intensificado la presión a los grupos narcoterroristas para lograr su debilitamiento, esto con el compromiso y apoyo de otros gobiernos interesados en la reducción de la producción de cultivos ilícitos que conllevan a la generación de grandes ingresos económicos que a su vez permiten el fortalecimiento de estos grupos al margen de la ley.

Para iniciar con este estudio documental, es importante tener claro los conceptos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para esto tomaremos como base las definiciones dadas por Negocios Responsables y Seguros (NRS)⁴, en su portal de internet, donde manifiestan lo siguiente:

Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de

³ Desde 1999, año en el cual se concibió el Plan Colombia.

⁴ es una alianza público-privada entre el sector público (regulador y de justicia) y el sector privado (financiero y real), para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en Colombia. Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC), la Embajada Británica en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

capitales, legitimación de capitales, entre otros. De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito. El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen. En Colombia esta conducta se encuentra incorporada en el Código penal en su artículo 323 (Negocios Responsables y Seguros, 2009, pág. sp)

La Unidad de Información y Análisis Financiero concuerda con las definiciones dadas por NRS, quienes a su vez indican que:

Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico sino que también se obtienen de delitos como: Tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, delitos producto de un concierto para delinquir, entre otros (Negocios Responsables y Seguros, 2009, pág. sp)

El lavado de activos contribuye a darle un matiz de legalidad a los recursos obtenidos en el desarrollo de actividades ilícitas, con lo que se genera entre otros delitos, un gran déficit a las finanzas de los estados, y todo lo que ello acarrea. Pero el principal problema que se podría tener, es que esos dineros recorrerían más fácil el camino que los conduce a la

financiación del terrorismo, haciendo más compleja su detección por parte de las autoridades competentes.

A su vez, Negocios Responsables y Seguros coincide con la Unidad de Información y Análisis Financiero, en definir el delito de financiación del terrorismo como se expone a continuación:

El delito de financiación del terrorismo lo comete quien directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas. (Negocios Responsables y Seguros, 2009, pág. sp)

Así mismo, hace hincapié en que los recursos para la financiación del terrorismo no provienen únicamente del narcotráfico, y que también la procedencia de los bienes o el dinero pueden ser de procedencia lícita (Negocios Responsables y Seguros, 2009, pág. sp)

Es de conocimiento general que los grupos armados ilegales que han existido a lo largo de la historia en Colombia, han empleado diferentes medios de financiación, ubicándose dentro de los más comunes y rentables el secuestro y la extorsión; pero sin lugar a dudas, el narcotráfico ha sido la principal fuente de recursos de estos grupos, convirtiéndose a la vez en el mayor factor de desestabilización del Estado colombiano, tal como lo dice el Grupo de Análisis de Narcotráfico de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de

Colombia (2009), así mismo contribuyendo al incremento de la criminalidad asociada a este delito y la descomposición social (pérdida de valores, corrupción).

De igual forma declaran que:

La acción de la fuerza pública contra este delito, especialmente de la Policía Nacional, ha originado cambios relevantes en el comportamiento del fenómeno, y se destaca la desarticulación de los carteles de narcotraficantes, la vinculación directa de los grupos armados ilegales (FARC, ELN, BACRIM) en todas las fases del ilícito, la migración de narcotraficantes hacia otros países, producto del acoso de las autoridades en Colombia, la entrega de estos a Estados Unidos, para evadir la acción de las autoridades colombianas y obtener beneficios jurídicos en Norteamérica, así como la búsqueda de otras fuentes de financiación de sus actividades terroristas. (Policía Nacional de Colombia, Grupo de análisis de Narcotráfico, Área de producción de inteligencia, 2009, págs. 311 - 322)

Al ver disminuida la producción y encontrar múltiples obstáculos y controles por parte de la Fuerza Pública, lo cual disminuye la facilidad y rentabilidad del negocio del narcotráfico, los grupos armados ilegales han explorado nuevos campos para financiar sus actividades, logrando identificar los grandes beneficios que pueden obtener del auge minero que actualmente se vive en Colombia y en el mundo.

Esto se ha podido determinar, entre otros aspectos, por el contenido de los computadores de los abatidos jefes guerrilleros Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, y Víctor Julio Suarez Rojas, alias Jorge Briceño Suarez o alias de Mono Jojoy, donde se

encontraron comunicaciones en las que manifestaban su interés en el empleo de la minería como fuente de financiación, según lo manifestado por el Presidente de la República, “Aquí hay unos correos donde 'Iván Márquez', por ejemplo, le propone al Secretariado (el máximo órgano de las FARC) realizar la explotación de minería en la zona del bloque oriental, donde habría varias minas de oro”(Juan Manuel Santos, 2011).

Los grupos guerrilleros no han sido los únicos interesados en la explotación de oro, también lo han sido las denominadas Bandas Criminales. Durante operativos realizados en zonas que son dominadas por estas bandas, se ha logrado la incautación de gran cantidad de maquinaria, entre ellas retroexcavadoras y dragas conocidas como “Brasileras”, así como otro tipo de elementos y maquinaria utilizada para la extracción de oro. Para las autoridades es evidente la participación de estas bandas, pues es la única forma de explicar que a regiones tan apartadas del país hayan ingresado estos equipos, los cuales requieren de una gran inversión económica.

Para poder comprender este fenómeno, debemos conocer lo que dice la legislación Colombiana sobre el lavado de activos, financiación del terrorismo y minería ilícita.

Según lo señalado por el Nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual entró en vigencia desde el día 24 de julio del 2001, en su artículo 323 plantea con relación al lavado de activos, lo siguiente:

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato

en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades la apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes(Vallejo, 2011, pág. 195).

De igual forma, la ley en mención, en su artículo 345 hace referencia a la financiación del terrorismo tal como se expone a continuación:

Artículo 345. Financiación del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes(Vallejo, 2011, pág. 211).

Como se ha expresado en párrafos anteriores, los grupos armados ilegales en Colombia, han tenido que buscar nuevas actividades que les permitan el lavado de activos y la financiación del terrorismo, gracias a las acciones contundentes y sistemáticas que ha venido desarrollando el Estado colombiano en contra del narcotráfico. Dentro de estas actividades podemos dar cuenta del empleo de la minería ilícita, principalmente la aurífera para llenar sus arcas y financiar toda serie de actos que atentan contra la integridad de la población.

De acuerdo con el Código Penal, en su artículo 338, donde indica lo siguiente:

Explotación Ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explote o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Vallejo, 2011, pág. 206).

Así mismo, la Ley 685 del 2001, Código de Minas, en su artículo 159 plantea que “la exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, se configura cuando realicen trabajos de exploración, extracción o captación de minerales de propiedad nacional o privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.”(Ley 685 Código de Minas, 2000, pág. 33).

De igual forma la ley mencionada en su artículo 160, habla sobre el aprovechamiento ilícito de recursos mineros indicando lo siguiente:

El aprovechamiento ilícito de recursos mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto en este Código para la minería de barequeo.(Ley 685 Código de Minas, 2000, pág. 33)

Es tan grande la influencia que tienen los grupos armados al margen de la ley sobre las actividades relacionadas con la minería ilícita, que no solo el Gobierno Nacional ha puesto sus ojos sobre ella, pues también lo han hecho diferentes entidades del orden nacional e internacional, los cuales han realizado algunos estudios, análisis y trabajos periodísticos sobre la problemática que se presenta en varias regiones del territorio colombiano.

Es el caso del periodista Simón Romero, del diario New York Times, quien recorrió algunas regiones del país, principalmente en el departamento de Antioquia, donde al finalizar su trabajo periodístico concluyó que la extracción ilegal de oro se ha convertido en una fuente de financiación del conflicto armado en Colombia, según artículo publicado por la revista Semana; incluso manifiesta, que dicho diario tituló el reportaje “En Colombia, nueva fiebre del oro, combustible de un viejo conflicto”(Romero, 2011, pág. sp).

En el trabajo periodístico, se argumenta que con la dinámica ascendente de los precios del oro, las FARC y las bandas criminales que surgieron de los grupos paramilitares ahora

utilizan ese dinero para financiar la guerra. Aduce también que los grupos ilegales están aprovechando las ventajas que dejan otras fuentes de dinero distintas a la coca, lo que “pone de relieve la dificultad de acabar con las endiabladas cuatro décadas del complejo conflicto en Colombia”(Romero, 2011, pág. sp).

Así mismo el diario antioqueño El Colombiano, recopila información suministrada por las autoridades, donde hacen alusión a las actividades delictivas que adelantan distintos grupos armados ilegales aprovechando la situación que se presenta con la falta de controles efectivos sobre la minería, destacando a su vez las operaciones que en los últimos meses han adelantado las unidades de la Policía Nacional de la mano de otras instituciones y organismos de seguridad del Estado buscando combatir este flagelo. Tal es el caso de un artículo publicado el día 31 de mayo de 2011 en el cual el Coronel José Acevedo, Comandante del Departamento de Policía Antioquia (2011), manifiesta lo siguiente: “en lo corrido de 2011 se han registrado 118 capturas en flagrancia y se han cerrado 57 minas ilegales en el departamento. Tenemos un grupo interdisciplinario donde hay una ingeniera forestal, una fiscal, trabajamos directamente con las corporaciones autónomas”(Acevedo, 2011).

El Oficial además señala:

Según informes de inteligencia, el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños son las áreas donde se concentran las mayores fuentes de financiación para los grupos armados al margen de la ley, a través de la extorsión al sector minero. Los frentes 4 y 36 de las Farc, así como varias facciones del ELN, extorsionan a mineros

legales e informales. Acción similar vendrían ejerciendo las bandas criminales de "los Urabeños" y "los Rastrojos", sin embargo no hay denuncias(Acevedo, 2011, pág. sp).

Conclusiones

La Minería Ilícita se ha convertido en una amenaza para el país, no solo por el daño ambiental, los procesos legales y fiscales que puede generar, sino también por ser una de las principales fuentes de financiación utilizada por diferentes grupos armados al margen de la ley, esto de acuerdo a información suministrada por las autoridades y la comunidad en general. Estos grupos tienen influencia directa en la Minería Ilícita, con equipos propios, o mediante el cobro de vacunas.

Es importante que diferentes instituciones y entidades de control nacional e internacional así como la población en general, reconozcan la minería ilícita como una fuente de recursos económicos empleada para financiar actividades terroristas, así como para el lavado de activos, constituyéndose estos dos aspectos en áreas de bajo control operacional y judicial por parte de las autoridades, principalmente, en el sector real de la economía, lo cual afecta directamente el desarrollo socio-económico de las regiones y del país, generando ante esto la necesidad de establecer estrategias que mitiguen esta problemática.

Referencias Bibliográficas

Acevedo, C. J. (31 de Mayo de 2011). *El Colombiano*. Recuperado el 31 de Mayo de 2011, de www.elcolombiano.com

Balen de Pérez Toro, M. T. (2001). *Lavado de Activos - El caso colombiano*. Washington D.C.

Juan Manuel Santos. (15 de Enero de 2011). *Presidencia de la República de Colombia*. Recuperado el 25 de Abril de 2011, de http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Enero/Paginas/20110115_06.aspx

Ley 685 Código de Minas. (2000). Bogotá D.C.: Diario Oficial 44.522.

Negocios Responsables y Seguros. (23 de 11 de 2009). *Negocios Responsables y Seguros*. Recuperado el 22 de Abril de 2011, de <http://www.negociosresponsablesyseguros.org>

Observatorio de Drogas de Colombia. (17 de Diciembre de 2010). *ODC - Observatorio de Drogas de Colombia*. Recuperado el 28 de Marzo de 2011, de <http://odc.dne.gov>

Policía Nacional de Colombia, Grupo de análisis de Narcotráfico, Área de producción de inteligencia. (2009). Comportamiento estratégico del narcotráfico, período 1998 - 2008. *Revista Criminalidad* , 311-322.

Romero, S. (2011 de Marzo de 2011). *Revista Semana - Análisis de Actualidad*. Recuperado el 23 de Abril de 2011, de <http://www.semana.com>

Vallejo, M. A. (2011). *Código Penal y de Procedimiento Penal*. Bogotá D.C.: Leyer.